

No. 58050*

**Argentina
and
Dominican Republic**

Agreement between the Argentine Republic and the Dominican Republic on the transfer of sentenced nationals and the enforcement of penal sentences. Santo Domingo, 23 February 2004

Entry into force: *31 January 2022 by the exchange of the instruments of ratification, in accordance with article XVII(1)*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Argentina, 8 January 2024*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Argentine
et
République dominicaine**

Accord entre la République argentine et la République dominicaine sur le transfèrement des nationaux condamnés et l'application des peines. Saint-Domingue, 23 février 2004

Entrée en vigueur : *31 janvier 2022 par l'échange des instruments de ratification, conformément au paragraphe 1 de l'article XVII*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : *Argentine, 8 janvier 2024*

**Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL]

**CONVENIO
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA REPUBLICA DOMINICANA
SOBRE TRASLADO DE NACIONALES CONDENADOS
Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES**

La República Argentina y la República Dominicana, en adelante denominadas "las Partes";

Deseando fomentar la cooperación mutua en materia de justicia penal;

Estimando que el objetivo de las penas es la reinserción social de las personas condenadas;

Considerando que para el logro de ese objetivo sería provechoso dar a los nacionales privados de su libertad o en régimen de libertad condicional anticipada o vigilada como resultado de la comisión de un delito, las posibilidades de cumplir la condena dentro del país de su nacionalidad;

Convienen lo siguiente:

ARTICULO I

1. Las penas o medidas de seguridad impuestas en la República Dominicana a nacionales de la República Argentina podrán ser cumplidas en la República Argentina de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.

2. Las penas o medidas de seguridad impuestas en la República Argentina a nacionales de la República Dominicana podrán ser cumplidas en la República Dominicana de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.

3. La calidad de nacional será considerada en el momento de la solicitud del traslado.

ARTICULO II

Para los fines de este Convenio se entiende que:

- a) "Estado de Condena" es la Parte que condenó a la persona y de la cual la persona habrá de ser trasladada.
- b) "Estado de Cumplimiento" es la Parte a la cual el condenado habrá de ser trasladado.
- c) "Condenado" es la persona a quién en el Estado de Condena, le ha sido impuesta una pena o una medida de seguridad en razón de un delito.

ARTICULO III

Las Partes se comunicarán por la vía diplomática la autoridad que se encargará de ejercer las funciones previstas en el presente Convenio.

ARTICULO IV

Para que se pueda proceder en la forma prevista por este Convenio, deberán reunirse las siguientes condiciones:

- a) Que la sentencia sea firme y definitiva, es decir, que no esté pendiente de recurso legal alguno, incluso procedimientos extraordinarios de apelación o revisión;
- b) Que la condena no sea a la pena de muerte, a menos que ésta haya sido conmutada;
- c) Que la pena que esté cumpliendo el condenado tenga una duración determinada en la sentencia condenatoria o haya sido fijada posteriormente por la autoridad competente;
- d) Que la parte de la condena que faltare cumplir al momento de efectuarse la solicitud sea superior a 2 años, y
- e) Un informe acerca de si el condenado ha reparado los daños ocasionados a la víctima en la medida que le haya sido posible, y sobre el comportamiento que haya tenido el condenado en el establecimiento carcelario donde estuvo cumpliendo la pena.

ARTICULO V

1. Las autoridades competentes de las Partes informarán a todo condenado nacional de la otra Parte sobre la posibilidad que le brinda la aplicación de este Convenio, y sobre las consecuencias jurídicas que derivarían del traslado.

2. En caso que lo solicite, el condenado podrá comunicarse con la autoridad consular de su país, quien a su vez podrá contactar a la autoridad competente del Estado de Condena, para solicitar que se preparen los antecedentes y estudios correspondientes del condenado.

3. La voluntad del condenado de ser trasladado deberá ser expresamente manifestada por escrito, con asistencia letrada y ante la autoridad consular correspondiente. El Estado de Condena deberá facilitar, si lo solicita el Estado de Cumplimiento, los instrumentos que demuestren que el condenado fue debidamente informado de las consecuencias legales que le traerá aparejado el traslado.

ARTICULO VI

1. El pedido de traslado podrá ser efectuado por el Estado de Cumplimiento o por el Estado de Condena por la vía diplomática.

2. Para proceder al pedido de traslado, el Estado de Cumplimiento valorará el delito por el cual la persona ha sido condenada, los antecedentes penales, su estado de salud, los vínculos que tenga con la sociedad del Estado de Cumplimiento, y toda otra circunstancia que pueda considerarse como factor positivo para su rehabilitación social en caso de cumplir la condena en el Estado de Cumplimiento.

3. El Estado de Cumplimiento tendrá absoluta discrecionalidad para proceder o no a efectuar la petición de traslado al Estado de Condena.

ARTICULO VII

1. El Estado de Condena analizará el pedido y comunicará su decisión al Estado de Cumplimiento.

2. El Estado de Condena podrá negar la autorización del traslado sin expresar la causa de la decisión.

3. Negada la autorización del traslado, el Estado de Cumplimiento no podrá efectuar un nuevo pedido, pero el Estado de Condena podrá revisar su decisión a instancia del Estado de Cumplimiento.

ARTICULO VIII

1. Si se aprobara el pedido, las Partes convendrán el lugar y la fecha de la entrega del condenado y la forma en que se hará efectivo el traslado.

El Estado de Cumplimiento será el responsable de la custodia y transporte del condenado desde el momento de la entrega.

2. El Estado de Cumplimiento no tendrá derecho a reembolso alguno por gastos contraídos por el traslado o cumplimiento de la condena en su territorio.

3. El Estado de Condena suministrará al Estado de Cumplimiento los testimonios de la sentencia y demás documentación que pueda necesitarse para el cumplimiento de la condena. Tales testimonios y documentación requerirán legalización, cuando así lo solicite el Estado de Cumplimiento.

4. Si el Estado de Cumplimiento considera que los informes suministrados por el Estado de Condena no son suficientes para permitirle la aplicación del presente Convenio, podrá solicitar información complementaria.

5. A solicitud del Estado de Condena, el Estado de Cumplimiento proporcionará informes sobre el estado de la ejecución de la sentencia de la persona trasladada conforme al presente Convenio, incluyendo lo relativo a su libertad condicional.

ARTICULO IX

1. La persona trasladada no podrá ser nuevamente enjuiciada en el Estado de Cumplimiento por el delito que motivo la condena impuesta por el Estado de Condena y su posterior traslado.

2. Para que el condenado pueda ser juzgado, condenado o sometido a cualquier restricción de su libertad personal por hechos anteriores y distintos a los que hubieran motivado su traslado, se procederá en los términos previstos en el Tratado de Extradición que estuviese vigente entre ambas Partes.

ARTICULO X

1. El Estado de Condena tendrá jurisdicción exclusiva respecto de todo procedimiento, cualquiera que sea su índole, que tenga por objeto anular, modificar o dejar sin efecto las sentencias dictadas por sus tribunales.

2. Sólo el Estado de Condena podrá amnistiar, indultar, revisar, perdonar o conmutar la condena impuesta.

3. Si así lo hiciere, comunicará la decisión al Estado de Cumplimiento, informándole sobre las consecuencias que en la legislación del Estado de Condena produce la decisión adoptada.

4. El Estado de Cumplimiento deberá adoptar de inmediato las medidas que correspondan a tales consecuencias.

ARTICULO XI

La ejecución de la sentencia se regirá por las leyes del Estado de Cumplimiento, incluso las condiciones para el otorgamiento y la revocación de la libertad condicional anticipada o vigilada.

ARTICULO XII

Ninguna sentencia de prisión será ejecutada por el Estado de Cumplimiento de tal manera que prolongue la duración de privación de libertad más allá del término de prisión impuesto por la sentencia del tribunal del Estado de Condena.

ARTICULO XIII

1. Si un nacional de una Parte estuviera cumpliendo una condena impuesta por la otra Parte bajo el régimen de condena condicional o de la libertad condicional, anticipada o vigilada, podrá cumplir dicha condena bajo la vigilancia de las autoridades del Estado de Cumplimiento.

2. El Estado de Condena solicitará las medidas de vigilancia que interesen, por la vía diplomática.

3. Para los efectos del presente Artículo, el Estado de Cumplimiento podrá adoptar las medidas de vigilancia solicitadas siempre que no contraríen su legislación. El Estado de Cumplimiento mantendrá informado al Estado de Condena sobre la forma en que se llevan a cabo y le comunicará de inmediato el incumplimiento por parte del condenado de las obligaciones que éste haya asumido.

ARTICULO XIV

Ninguna disposición de este Convenio se interpretará en el sentido de limitar la facultad que las Partes puedan tener, independientemente del presente Convenio, para conceder o aceptar el traslado de un menor infractor.

ARTICULO XV

Las Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias y a establecer los procedimientos administrativos adecuados para el cumplimiento de los propósitos de este Convenio.

ARTICULO XVI

Este Convenio será aplicable también al cumplimiento de sentencias dictadas con anterioridad a su entrada en vigor.

ARTICULO XVII

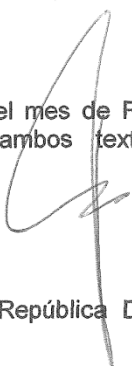
1. El presente Convenio deberá ser ratificado y entrará en vigor en la fecha en que se produzca el intercambio de los respectivos instrumentos de ratificación.

2. Este Convenio tendrá una duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo, mediante notificación escrita a través de la vía diplomática. La denuncia será efectiva ciento ochenta (180) días después de haberse efectuado dicha notificación.

Hecho en Santo Domingo, a los veintitrés días del mes de Febrero del año 2004, en dos ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.



Por la República Argentina



Por la República Dominicana

[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE DOMINICAN
REPUBLIC ON THE TRANSFER OF SENTENCED NATIONALS AND THE
ENFORCEMENT OF PENAL SENTENCES

The Argentine Republic and the Dominican Republic, hereinafter referred to as “the Parties”,
Desiring to promote mutual cooperation in criminal justice matters,

Being of the view that the purpose of sentences is the reintegration of the sentenced persons
into society,

Considering that, with a view to achieving that purpose, it would be beneficial to enable
nationals who, as a result of committing an offence, are deprived of their liberty or who are subject
to conditional early release or probation, to serve their sentences in their countries of nationality,

Have agreed as follows:

Article I

1. Sentences or security measures imposed in the Dominican Republic on nationals of the
Argentine Republic may be served in the Argentine Republic in accordance with the provisions of
this Agreement.

2. Sentences or security measures imposed in the Argentine Republic on nationals of the
Dominican Republic may be served in the Dominican Republic in accordance with the provisions
of this Agreement.

3. Nationality shall be considered when a transfer request is made.

Article II

For the purposes of this Agreement:

- (a) “Sentencing State” means the Party that sentenced the person, from which he or she
is to be transferred.
- (b) “Administering State” means the Party to which the sentenced person is to be
transferred.
- (c) “Sentenced person” means a person who, in the sentencing State, has been sentenced
to deprivation of liberty or a safety measure on account of a criminal offence.

Article III

The Parties shall notify each other through the diplomatic channel of the authority responsible
for performing the functions specified in this Agreement.

Article IV

The procedures set forth in this Agreement may be enacted only if the following conditions are met:

- (a) The sentence should be final and definitive, i.e. there should not be any pending legal appeals, including extraordinary appeal or review proceedings;
- (b) The sentence should not be a death sentence, unless it has been commuted;
- (c) The sentence that is being served by the sentenced person should have a fixed term, as stipulated in the judgment or subsequently decided by the competent authority;
- (d) At the time the request is made, there should be at least two years of the sentence remaining;
- (e) A report on whether the sentenced person has repaired the harm caused to the victim, to the extent possible, and on his or her behaviour at the detention facility where he or she has been serving the sentence.

Article V

1. The competent authorities of the Parties shall inform all sentenced persons who are nationals of the other Party of the possibility of a transfer afforded them under this Agreement and of the legal consequences arising from a transfer.

2. If the sentenced person so requests, he or she shall be allowed to contact the consular authority of his or her country, who in turn may contact the competent authority of the sentencing State to request that the relevant background information and records of the sentenced person be prepared.

3. The willingness of the sentenced person to be transferred shall be expressed in writing, with assistance from counsel and before the relevant consular authority. The sentencing State shall, if so requested by the administering State, furnish documentation proving that the sentenced person was properly informed of the legal consequences of the transfer.

Article VI

1. A transfer request may be made by the administering State or by the sentencing State, through the diplomatic channel.

2. To proceed with a transfer request, the administering State shall assess the offence for which the sentenced person has been sentenced, his or her criminal record, health status and ties to the society of the administering State, and any other circumstance that may be considered as a positive factor for his or her social rehabilitation should the sentence be served in the administering State.

3. The administering State shall have absolute discretion in deciding whether or not to make a transfer request to the sentencing State.

Article VII

1. The sentencing State shall consider the request and communicate its decision to the administering State.

2. The sentencing State may deny authorization for a transfer without disclosing the reasons for its decision.

3. After authorization for a transfer has been denied, the administering State may not file another request, but the sentencing State may review its decision at the request of the administering State.

Article VIII

1. If the request is approved, the Parties shall agree on the place and date for the handover of the sentenced person and the manner in which it is to be effected.

The administering State shall be responsible for the custody and transport of the sentenced person from the moment of the handover.

2. The administering State shall not be entitled to any reimbursement for costs incurred for the transfer or the enforcement of the sentence in its territory.

3. The sentencing State shall furnish the administering State with certified true copies of the judgment and any other documentation required for enforcement of the sentence. The certified true copies of the judgment and other documentation shall be authenticated when such authentication is requested by the administering State.

4. If the administering State considers that the reports furnished by the sentencing State are not sufficient to enable it to implement this Agreement, it may request additional information.

5. At the request of the sentencing State, the administering State shall provide reports on the status of enforcement of the sentence of the sentenced person transferred in accordance with this Agreement, including information on his or her conditional release.

Article IX

1. The person transferred shall not be tried again in the administering State for the offence that gave rise to the sentence imposed by the sentencing State and his or her subsequent transfer.

2. In order for the sentenced person to be tried, sentenced or subjected to any type of restriction on his or her personal liberty for prior acts other than those that were the grounds for his or her transfer, the procedure provided for in the Extradition Agreement in force between the two parties shall be applied.

Article X

1. The sentencing State shall have exclusive jurisdiction over any proceedings, regardless of their nature, intended to nullify, modify or set aside sentences handed down by its courts.

2. Only the sentencing State may grant amnesty or remission, review, pardon or commute the sentence imposed.

3. If the sentencing State does so, it shall notify the administering State of the decision, informing it of the consequences thereof under the laws of the sentencing State.

4. The administering State shall immediately take the appropriate measures in respect of such consequences.

Article XI

The enforcement of the sentence shall be governed by the laws of the administering State, including the conditions for the granting and revocation of conditional early release or probation.

Article XII

No prison sentence shall be enforced by the administering State in such a way as to increase the period of deprivation of liberty beyond the prison term imposed under the sentence of the court of the sentencing State.

Article XIII

1. If a national of either Party is serving a sentence imposed by the other Party under a suspended sentence or conditional early release or probation, he or she may serve such sentence under the supervision of the authorities of the administering State.

2. The sentencing State shall request appropriate supervisory measures through the diplomatic channel.

3. For the purposes of this article, the administering State may take the requested supervisory measures provided that such measures are not contrary to its laws. The administering State shall keep the sentencing State informed about the state of enforcement and shall immediately notify it of any failure by the sentenced person to fulfil the obligations that he or she has assumed.

Article XIV

No provision of this Agreement shall be interpreted in such a way as to limit the power of the Parties, independently of this Agreement, to grant or accept the transfer of a juvenile offender.

Article XV

The Parties undertake to adopt the necessary legislative measures and to establish appropriate administrative procedures to fulfil the purposes of this Agreement.

Article XVI

This Agreement shall apply also to the enforcement of sentences imposed before its entry into force.

Article XVII

1. This Agreement shall be ratified and shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification.

2. This Agreement shall remain in force indefinitely. Either Party may denounce the Agreement by giving notice in writing through the diplomatic channel. The denunciation shall take effect 180 days after such notice is given.

DONE at Santo Domingo, on 23 February 2004, in two original copies, both texts being equally authentic.

For the Argentine Republic:

[SIGNED]

For the Dominican Republic:

[SIGNED]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE SUR LE TRANSFÈREMENT DES NATIONAUX CONDAMNÉS ET L'APPLICATION DES PEINES

La République argentine et la République dominicaine, ci-après dénommées les « Parties », Désireuses de promouvoir la coopération mutuelle en matière de justice pénale,

Étant d'avis que l'objectif des peines est de permettre aux personnes condamnées de réintégrer la société,

Considérant que, pour atteindre cet objectif, il serait utile de permettre aux ressortissants qui, à la suite d'une infraction, sont privés de leur liberté ou font l'objet d'une libération anticipée conditionnelle ou d'une mise à l'épreuve, de purger leur peine dans le pays dont ils ont la nationalité,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

1. Les peines ou mesures de sûreté imposées en République dominicaine à des ressortissants de la République argentine peuvent être exécutées en République argentine conformément aux dispositions du présent Accord.

2. Les peines ou mesures de sûreté imposées en République argentine à des ressortissants de la République dominicaine peuvent être exécutées en République dominicaine conformément aux dispositions du présent Accord.

3. La nationalité est prise en considération lors d'une demande de transfèrement.

Article II

Au sens du présent Accord :

- a) « État de condamnation » désigne la Partie qui a condamné la personne et à partir de laquelle celle-ci doit être transférée.
- b) « État d'exécution » désigne la Partie vers laquelle la personne condamnée doit être transférée.
- c) « personne condamnée » désigne une personne qui, dans l'État de condamnation, a été condamnée à une peine privative de liberté ou à une mesure de sûreté en raison d'une infraction pénale.

Article III

Les Parties s'informent mutuellement par la voie diplomatique des autorités chargées d'exercer les fonctions spécifiées dans le présent Accord.

Article IV

Les procédures prévues par le présent Accord ne peuvent être mises en œuvre que si les conditions suivantes sont remplies :

- a) La condamnation doit être définitive, c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucun recours juridique en cours, y compris les procédures d'appel ou de révision extraordinaires ;
- b) La peine ne doit pas être la peine de mort, à moins qu'elle n'ait été commuée ;
- c) La peine exécutée par la personne condamnée doit avoir une durée déterminée, telle que stipulée dans le jugement ou décidée ultérieurement par l'autorité compétente ;
- d) Au moment de la demande, il doit rester au moins deux ans de peine à purger ;
- e) Un rapport indique si la personne condamnée a réparé le préjudice causé à la victime, dans la mesure du possible, et décrit son comportement dans l'établissement pénitentiaire où elle a purgé sa peine.

Article V

1. Les autorités compétentes des Parties informent toutes les personnes condamnées qui sont des ressortissants de l'autre Partie de la possibilité d'un transfèrement au titre du présent Accord et des conséquences juridiques qui en découlent.

2. Si la personne condamnée en fait la demande, elle sera autorisée à contacter l'autorité consulaire de son pays, qui pourra à son tour contacter l'autorité compétente de l'État de condamnation pour demander la préparation des informations et des dossiers pertinents concernant la personne condamnée.

3. La volonté de la personne condamnée d'être transférée doit être exprimée par écrit, avec l'aide de son avocat et devant l'autorité consulaire compétente. L'État de condamnation doit, à la demande de l'État d'exécution, fournir des documents prouvant que la personne condamnée a été dûment informée des conséquences juridiques du transfèrement.

Article VI

1. Une demande de transfèrement peut être présentée par l'État d'exécution ou par l'État de condamnation, par la voie diplomatique.

2. Pour donner suite à une demande de transfèrement, l'État d'exécution évalue l'infraction pour laquelle la personne condamnée a été reconnue coupable, son casier judiciaire, son état de santé et ses liens avec la société de l'État d'exécution, ainsi que toute autre circonstance susceptible d'être considérée comme un facteur positif pour sa réinsertion sociale si la peine est purgée dans l'État d'exécution.

3. L'État d'exécution dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu pour décider de présenter ou non une demande de transfèrement à l'État de condamnation.

Article VII

1. L'État de condamnation examine la demande et communique sa décision à l'État d'exécution.

2. L'État de condamnation peut refuser l'autorisation de transfèrement sans divulguer les motifs de sa décision.

3. Après qu'une autorisation de transfèrement a été refusée, l'État d'exécution ne peut plus présenter de nouvelle demande, mais l'État de condamnation peut réexaminer sa décision à la demande de l'État d'exécution.

Article VIII

1. Une fois le transfèrement approuvé, les Parties conviennent du lieu et de la date de la remise de la personne condamnée et de la manière dont elle doit être effectuée.

4. L'État d'exécution est responsable de la garde et du transport de la personne condamnée jusqu'au moment de la remise.

2. L'État d'exécution ne peut prétendre à aucun remboursement des frais engagés pour le transfèrement ou l'application de la peine sur son territoire.

3. L'État de condamnation fournit à l'État d'exécution des copies certifiées conformes du jugement et tout autre document nécessaire à l'application de la peine. Les copies certifiées conformes du jugement et des autres documents sont authentifiées lorsqu'une authentification est demandée par l'État d'exécution.

4. Si l'État d'exécution estime que les rapports fournis par l'État de condamnation ne sont pas suffisants pour lui permettre d'appliquer le présent Accord, il peut demander des informations supplémentaires.

5. À la demande de l'État de condamnation, l'État d'exécution fournit des rapports sur le suivi de l'application de la peine de la personne condamnée transférée conformément au présent Accord, y compris des informations sur sa libération conditionnelle.

Article IX

1. La personne transférée ne peut pas être poursuivie de nouveau dans l'État d'exécution pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation prononcée par l'État de condamnation et à son transfèrement ultérieur.

2. Pour que la personne condamnée soit jugée, condamnée ou soumise à une quelconque restriction de sa liberté personnelle pour des faits antérieurs autres que ceux qui ont motivé son transfèrement, la procédure prévue dans l'accord d'extradition en vigueur entre les deux Parties est appliquée.

Article X

1. L'État de condamnation a la compétence exclusive pour toute procédure, quelle qu'en soit la forme, qui vise à invalider, modifier ou annuler des sentences prononcées par ses tribunaux.

2. Seul l'État de condamnation peut accorder l'amnistie ou la remise de peine, réviser, gracier ou commuer la peine prononcée.

3. Dans ce cas, l'État de condamnation notifie sa décision à l'État d'exécution en l'informant des conséquences de celle-ci en vertu de sa législation.

4. L'État d'exécution prend immédiatement les mesures appropriées à l'égard de ces conséquences.

Article XI

L'application de la peine est régie par la législation de l'État d'exécution, y compris les conditions d'octroi et de révocation de la libération conditionnelle anticipée ou de la probation.

Article XII

Aucune peine d'emprisonnement n'est appliquée par l'État d'exécution de manière à prolonger la durée de la privation de liberté au-delà de la date à laquelle celle-ci aurait pris fin conformément à la sentence du tribunal de l'État de condamnation.

Article XIII

1. Si un ressortissant de l'une des Parties purge une peine prononcée par l'autre Partie dans le cadre d'un sursis, d'une libération anticipée conditionnelle ou d'une mise à l'épreuve, il/elle peut purger cette peine sous la supervision des autorités de l'État d'exécution.

2. L'État de condamnation demande des mesures de contrôle appropriées par la voie diplomatique.

3. Aux fins du présent article, l'État d'exécution peut prendre les mesures de contrôle demandées, à condition que ces mesures ne soient pas contraires à sa législation. L'État d'exécution tient l'État de condamnation informé du suivi de l'application et lui notifie immédiatement tout manquement de la personne condamnée à ses engagements.

Article XIV

Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée de manière à limiter le pouvoir des Parties, indépendamment du présent Accord, d'accorder ou d'accepter le transfèrement d'un délinquant juvénile.

Article XV

Les Parties s'engagent à adopter les mesures législatives nécessaires et à mettre en place les procédures administratives appropriées pour mettre en œuvre l'objet du présent Accord.

Article XVI

Le présent Accord est également appliqué à l'exécution des peines prononcées avant son entrée en vigueur.

Article XVII

1. Le présent Accord est soumis à ratification et entre en vigueur le jour de l'échange des documents de ratification.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut dénoncer l'Accord par notification écrite transmise par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet 180 jours après la date de ladite notification.

FAIT à Saint-Domingue le 23 février 2004, en deux exemplaires originaux, les deux textes faisant également foi.

Pour la République argentine :

[SIGNÉ]

Pour la République dominicaine :

[SIGNÉ]